

EL SOCIALISTA

211

Centroamericano



Primera Quincena
Diciembre 2015

Guatemala: Q 4.00
Honduras: L 12.00
El Salvador: US\$ 0.60
Nicaragua: C\$ 10.00
Costa Rica: ₡ 500.00

"Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroamericana"

www.elsoca.org www.facebook.com/elsoca.org www.twitter.com/elsocca

LAS DURAS LECCIONES DE LA DERROTA ELECTORAL DEL CHAVISMO EN VENEZUELA.



COSTA RICA.- CRÍSIS ECONÓMICA Y ESPECTRO POLÍTICO



GUATEMALA.- Solo la unidad de Médicos y Trabajadores solucionará la crisis del sistema de salud pública

EL SALVADOR.- Por verdaderos aumentos de salarios para todos los trabajadores



INTERNACIONAL.- El capitalismo conduce a la barbarie



HONDURAS.- Corrupción y Deportes



NICARAGUA.- Realidades e hipocresías con la Ley de Seguridad Soberana

IAS DURAS LECCIONES DE LA DERROTA ELECTORAL DEL CHAVISMO EN VENEZUELA.

El resultado de las elecciones legislativa del pasado 6 de Diciembre en Venezuela, no constituye una sorpresa. Las diferentes encuestas así lo anunciaban, aunque no deja de asombrar la magnitud de la victoria electoral obtenida por la oposición burguesa agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

Los resultados finales del Consejo Nacional de Elecciones (CNE) indican que de un total de 167 diputados de la próxima Asamblea Nacional, 116 pertenecerán a las listas de la MUD (obtuvo el 56,7% de los votos) y 55 diputados (obtuvo el 40,8% de los votos) pertenecerán al oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).

La enorme crisis económica y social que vive Venezuela, por el desplome de los precios internacionales del petróleo, produjo en fenómeno de polarización política y un masivo voto castigo contra el gobierno de Nicolás Maduro, heredero del chavismo.

Se ha producido la segunda gran derrota política y electoral del chavismo en los 17 años de gobierno. La primera fue la derrota electoral del referendo constitucional de 2007, en donde el chavismo no salió debilitado a nivel de las instituciones del Estado. Pero en esta ocasión, la situación es diferente. La acumulación de poderes del presidente Nicolás Maduro deviene del control mayoritario dentro de la Asamblea Nacional, la que delega supremos poderes a través de las leyes habilitantes.

Ahora la MUD tiene la mayoría absoluta de diputados dentro de la Asamblea Nacional. Las dos terceras partes de los diputados pueden reorganizar los poderes del Estado, convocar a Asamblea Nacional Constituyente, aprobar leyes orgánicas, etc.

La oposición ha dejado de ser minoritaria para convertirse en una poderosa fuerza política. Hay un vuelco en la correlación de fuerzas entre las clases sociales en Venezuela. No obstante, a pesar de semejante triunfo, es poco probable que la antigua oposición se embarque en la aventura de recortar el periodo presidencial, a través de un referendo revocatorio. Ganas no les faltan, pero aunque ganasen las elecciones generales y recuperaran la presidencia de Venezuela, no subirán los precios internacionales del petróleo.

Por ello, está cada vez más claro, que la estrategia de la nueva mayoría parlamentaria será desmantelar gradualmente el régimen bonapartista que instaló Hugo Chávez, cocinando a fuego lento al gobierno de Nicolás Maduro.

Aunque el chavismo ha perdido el control de la Asamblea Nacional sigue teniendo importante arraigo en sectores populares. Sería un grave error creer que esta liquidado, está en crisis, en cuidados intensivos, pero no ha muerto. Lo más probable es que se imponga una línea de negociaciones entre la MUD y el PSUV, organizando una suave transición para atrás.

Ahora bien, la derrota del pasado 6 de Diciembre es producto de la política consciente del chavismo de no romper el modelo de dependencia económica del petróleo. En vez de impulsar una reforma agraria, y la creación de una industria manufacturera nacionalizada, que sería subsidiada con los petrodólares, que ampliaría el mercado interno y al menos daría la autosuficiencia alimentaria (como lo hizo el cardenismo en México en 1940), prefirió establecer relaciones con sectores de la burguesía latinoamericana, dando la falsa imagen de unidad latinoamericana, profundizando la dependencia de Venezuela en relación a los precios del petróleo y creando una burguesía compradora, conocida como "boli-burguesía", que ha acumulado mucho dinero y poder con las coimas de los multimillonarios contratos de compra en el extranjero.

Por el momento, los partidos de derecha han canalizado el descontento social, pero no siempre será así, porque la crisis económica continuará y no hay fuerza política de derecha que logre revertir la postración estructural de la economía dependiente del petróleo.

Se avecinan, pues, momentos de lucha y de traiciones. Este giro a la derecha de casi el 60% de la población, quiere mejores condiciones de vida. Las ideologías sin sustento material se desvanecen rápidamente. Por ello es urgente y necesario construir una nueva dirección revolucionaria. ■



ESCA No. 211
Primera Quincena
Diciembre 2015

Impresión:
8 Diciembre 2015

DIRECTOR:
Victoriano Sánchez

CONSEJO EDITORIAL:
Armando Tezucún,
Germán Aquino,
Maximiliano Cavalera,
Gerson de la Rosa,
Eduardo Villalobos,
José Manuel Flores Arguijo
(in Memoriam).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Ricardo Ruiz

AQUI NOS ENCONTRÁS
www.elsoca.org
facebook.com/elsoca.org
twitter.com/elsoca

Redacción:
elsoca@elsoca.org

Secretariado Ejecutivo:
psoca@elsoca.org

Secciones:
psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org

EL SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
es una publicación del
PARTIDO SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
(PSOCA),
fundado y reconstituido
el día 4 de Abril del año 2009.

Se publica en dos formatos:
una versión digital que se
actualiza diariamente
(www.elsoca.org) y otra
versión impresa que se publica
quincenalmente.

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la opinión
editorial del PSOCA, sino la
exclusiva responsabilidad de sus
autores.



POR VERDADEROS AUMENTOS SALARIALES PARA TODOS LOS TRABAJADORES

Por German Aquino

Según el código de trabajo el cual en gran parte regula las relaciones entre explotados y explotadores, contempla la revisión del salario mínimo cada tres años, los indicadores de los cuales parte la revisión del aumento al salario mínimo no están de acorde a la realidad de la clase trabajadora. Este año según dicho código corresponde la revisión del salario mínimo, lo cual al igual que los gobiernos anteriores es aprovechado para querer aparentar que están haciendo algo por la clase trabajadora.

Los cantos de sirena y golpes de pecho del FMLN

En lo que va de los gobiernos del FMLN, estos no han realizado mayores acciones a favor de los trabajadores de la empresa privada, ni de los empleados públicos y municipales, pero esta año el FMLN aprovechando que corresponde la revisión del salario mínimo, en el contexto de su primer congreso y para congraciarse con su militancia realizó el anuncio de luchar por un aumento del salario mínimo, al respecto Medardo González secretario del FMLN quien reconoció que el FMLN no ha realizado mayores acciones en relación al salario mínimo manifestó "...En la relaciones obrero-patronales, no hemos como FMLN tenido la combatividad que el pueblo espera. Es bueno tener en cuenta que existe una ofensiva mediática permanente orientada a hacerle creer al pueblo que las jornadas de trabajo extenuantes para los trabajadores, o el no pago de impuestos (por los empresarios), no constituyen problema. Que el dinero que obtiene la oligarquía mediante esos métodos, es legítimo..." "No debe ser aceptado que se pague un salario de hambre", insistió. "Y no hemos sido lo suficientemente activos con esto", Añadió. "No es posible que los trabajadores campesinos no tengan un salario justo ni seguridad social. Debemos luchar por el aumento

del salario mínimo del campo y la ciudad. Esa debe ser nuestra bandera. Luchar por elevar el salario mínimo y combatir a los empresarios evasores y CORRUPTOS..." (<http://www.fmln.org.sv/sv/oficialv3c/index.php/1er-congreso/1004-08111504>), el FMLN habla de aumentos al salario



mínimo, no habla de aumentos de salarios para toda la clase trabajadora como si los salarios promedios que gana la clase trabajadora fueran suficientes para cubrir todas las necesidades. Es claro el FMLN con su discurso dar esperanza a ciertos sectores a la vez que unifica a su militancia, la cual mantiene cierta aptitud crítica para con la dirección del FMLN.

El FMLN y su política del buen burgués

Por un lado la dirección del FMLN dice "...estamos en un periodo de agudización de la lucha entre el pueblo salvadoreño y sus tradicionales opresores...Estamos obligados a vencer la oligarquía. Convoco a todos a derrotar a la derecha para asegurar a nuestro pueblo una vida digna en esta tierra que nos ha visto nacer..." pero por otro contradictoriamente dice que "...aliarnos con los empresarios patriotas honestos que están ayudando a sacar adelante nuestro país". En este discurso el FMLN bien reconoce la existencia de una clase opresora tradicional, la cual denomina oligarquía (la mala) y la de una burguesía emergente la cual denomina empresarios patriotas (la buena), la clase trabajadora no debemos confundirnos no existen explotadores o empresarios

patriotas todo gran empresario crece a partir de la sobreexplotación de los trabajadores, en estos momentos dicha empresarios patriotas se disputan con la oligarquía el control del estado para poder consolidarse como oligarquía y en esa lucha buscan atraerse a la clase trabajadora.

Por un plan de lucha sindical de cara a los aumentos salariales

Actualmente los salarios mínimos mensuales son de 251.70 dólares en el comercio y los servicios, 246.60 en la industria, 210.90 en las maquilas, 171 en los beneficios de café, 129 en la recolección de café, 124.20 en los ingenios azucareros, 118.20 en el agro, 109.20 en la recolección de azúcar y 98.70 en la recolección de algodón, mientras a nivel estatal es de \$300.00; mientras la canasta básica o alimenticia según estudios técnicos ronda por los 204 dólares al mes en el área urbana y un promedio 149 dólares en el área rural... y la canasta familiar la cual además de la alimenticia incluye el pago de ciertos servicios ronda por los 408 dólares en el área urbana y 298 en el área rural.

En materia de salarios observamos una desigualdad entre los diferentes salarios mínimos, aun los mismo costos de la canasta básica presente variantes como si los trabajadores del campo pagaran precios diferenciados al momento de la compra. Lo anterior ya ha sido reconocido por el mismo gobierno del FMLN.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que debemos exigir igualdad de salarios para los trabajadores del campo y de la ciudad sean estos privados o estatales, dichos salarios deben cubrir la canasta básica y la canasta familiar. Las organizaciones sindicales y campesinas deben mantener la independencia de clase respecto al actual gobierno, se debe tener en cuenta que no existe el buen explotador. ■



EL PRESUPUESTO DE 2016 ANUNCIA MAS AUSTERIDAD

Por Leonardo Ixim

El pasado 30 de noviembre, último día para aprobar el Presupuesto General de Ingresos del Estado según la Constitución Política, el Congreso de la República el del año 2016, con 100 votos a favor, 8 en contra y 50 abstenciones. El monto aprobado fue de Q 70,746,346, menor que el enviado por el defenestrado gobierno del Partido Patriota, que era un poco más de Q72 mil millones.

Este presupuesto presenta una serie de recortes a partidas esenciales para garantizar derechos básicos de la población. Sin embargo se asegura Q 12 mil 400 millones para pagar deuda. Por otra parte se espera recaudar Q54.5 mil millones, a la espera de un préstamo de Q 4 mil 500 millones (US\$550 millones) y la emisión de bonos por el ejecutivo de Q 9 mil millones; el Congreso tiene autorizada la emisión del 50 por ciento de tales bonos en el primer semestre del año entrante, a la espera del préstamo mencionado y en caso no se apruebe tal préstamo, en el segundo semestre se autoriza al gobierno central la emisión del otro 50 %. Pese a priorizar el pago de deuda, se mantiene en el aire la deuda de arrastre en carteras como salud, comunicación, y gobernación de Q2 mil 500 millones.

Es posible que no se alcance la meta de recaudación fiscal. En este sentido, las capacidades de recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria, golpeada por la defraudación aduanera donde estuvieron implicados altos cargos del gobierno pasado, más el constante contrabando donde están comprometidos personeros de la oligarquía, más las exenciones fiscales que éstos reciben y que nuevamente sectores como los empresarios maquileros exigen que se mantengan, se verían mermadas.

Por tal motivo el gobierno electo de Morales y el ex rector de la Usac, Jafeth Cabrera, se retiraron intempestivamente de la negociación del presupuesto, mostrando no solo incompetencia a la hora de negociar, sino su amarre con

sectores empresariales que exigieron recortes en el presupuesto. Sin embargo los grandes problemas que afectan el Estado y su incapacidad de proveer servicios públicos esenciales afectarán la estabilidad del nuevo gobierno, cuyo control estará disputado por distintos factores de poder.

Dentro los recortes más evidentes estarán la eliminación total del programa de entrega de fertilizantes, afectando a



casi un millón de familias, un programa que data del gobierno de Portillo, que en efecto se caracteriza por generar una relación clientelar, además de generar un desgaste que a largo plazo vuelve improductiva la tierra. El problema es que se elimina esa partida pero no se reorienta ese recurso en invertir en programas por ejemplo de riego; de esa forma se evidencia el poco interés que se tiene de parte del Estado por los pequeños agricultores y campesinos.

Otro caso sonado por las denuncias hechas fue el recorte en un 50 % de la partida destinada a prever retrovirales a los infectados con el virus del VIH, reduciéndose de Q 30 millones a Q15 millones, poniendo en peligro la vida de los afectados por esta enfermedad y alejándose aún más de una de las metas del milenio en lo que respecta a reducir las muertes de infectados. Se reduce en casi 90 % la partida para la reforma policial; este programa, que data del gobierno de Colom, busca modernizarla y darle mayor fortaleza, contrario a las tendencias de militarización de la seguridad pública, sin embargo nunca se le ha otorgado la prioridad necesaria.

La cartera de salud es de las más afectadas con recortes por Q1 mil millones, afectando la compra de insumos y medicamentos, además de programas como el de fomento de salud y salud preventiva, aunque recibe una inyección para la prevención de la desnutrición crónica. Se reducen los montos por su parte en defensa, gobernación, agricultura, entre otros.

Se puso por su parte una serie de controles en lo que se refiere a viáticos y gastos conexos, prohibiendo el uso de hospedajes y pasajes de lujo; se anuncia un reglamento para subsidios para controlar su erogación y la reducción de gastos en combustible y telefonía celular. Entre las carteras que recibieron aumentos está educación que recibió Q12, 892.3 millones, teniendo Q12, 295.6 millones en 2015 supuestamente destinado a inversión; la Universidad de San Carlos, que recibe, además del monto constitucional de Q1, 489.8, un aporte Q47.1 millones contemplados en un préstamo del Bcie para construcción de edificios, pero sin embargo es menor a los 3 mil millones, el 5 % del presupuesto, que manda la Constitución. Por otro lado el servicio de la deuda está entre los favorecidos, previendo que se continuará la lógica de desfinanciamiento del Estado, endeudamiento y el peligro de default que genera la falta de ingresos para pagar deuda.

El tema de los candados queda al aire porque se permitirá al nuevo gobierno hacer transferencias sin ningún control, además de Q1,500 millones para ong's, muchas de ellas relacionados al manoseo del listado geográfico de obras que controlan los diputados. La discusión de los pactos colectivos y los beneficios onerosos de algunos líderes sindicales vendrá después, quizás negociando con éstos y recortando derechos adquiridos por los trabajadores. ■



POR LA UNIDAD DE MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD

Por Armando Tezucún

Las políticas neoliberales que se han venido implementando en el país desde la década de los 90s, con la privatización de los bienes del Estado y la extensión de los privilegios fiscales a las empresas, han redundado en primer lugar en el debilitamiento de los servicios públicos que el Estado debe facilitar a la población, sobre todo a la que el mismo sistema capitalista empuja a una situación de pobreza.

El actual desastre del sistema nacional de salud no es producto de este gobierno, ni de los actos de corrupción que la Cicig y el MP han revelado. Recordemos que ya en 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, los médicos de los hospitales públicos realizaron una huelga de casi cuatro meses, reclamando el abastecimiento adecuado de los hospitales en cuanto a medicinas, equipos e insumos. La misma situación se dio durante el gobierno de Álvaro Colom y la UNE. Gobierno tras gobierno, el problema del servicio de salud pública en vez de mejorar, se ha ido agravando.

Durante el desaparecido gobierno de Pérez Molina y el PP, las denuncias de desabastecimiento y escasez en los centros de salud y hospitales fueron continuas, además de las demandas de los trabajadores del sector por falta de pago de salarios e incumplimiento del pacto colectivo. En realidad podemos hablar de una crisis permanente, que ha sido aliviada a medias por los distintos gobiernos mediante parches, pero que intermitentemente sale a flote una y otra vez.

Las medidas tomadas bajo el nuevo gobierno de Alejandro Maldonado, que sustituyó al defenestrado Pérez Molina, van en la misma línea.

A mediados de noviembre el Ministerio de Finanzas aprobó un espacio presupuestario de Q 350 millones destinado al Ministerio de Salud, que sería repartido entre los diversos centros hospitalarios para remediar las necesidades

más urgentes. El nuevo ministro de salud Mariano Rayo, reconoció que ese es solo un paliativo, pues el ministerio tiene una deuda con los proveedores que se remonta a 2012, que ascendía al 11 de noviembre a Q 530,150,998. Esta vez la crisis es tan grave que los médicos y trabajadores del capitalino Hospital San Juan de Dios temen que éste quede completamente paralizado. Por otro lado, los médicos y personal del Hospital Roosevelt, el otro gran hospital de la capital, paralizaron la consulta externa y otros servicios desde el 5 de noviembre al 7 diciembre. Los trabajadores del Hospital Pedro de Bethancourt de Antigua también paralizaron labores para exigir pago de salarios, medicinas e insumos. Lo mismo sucedió en los hospitales de Quetzaltenango, Huehuetenango y Amatitlán, en lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos calificó como la peor crisis del sistema de salud en la historia del país.

Las medidas de emergencia para subsanar el estado al que ha llevado el sector salud la irresponsabilidad de los diferentes gobiernos empiezan a apuntar a medidas privatizadoras. Un sector de los médicos sugirió que se autorizara de nuevo el funcionamiento de los patronatos y fundaciones, que son entidades que recaudan donaciones privadas para financiar los hospitales. Éstos proliferaron durante los años 90s, pero fueron clausurados. El principal sindicato de salud protestó contra esta idea, denunciándola como privatizadora y recordando que fueron los trabajadores sindicalizados los que lograron el cierre de los patronatos.

El 23 de noviembre, médicos, trabajadores, estudiantes universitarios y población en general realizaron una caminata exigiendo una solución al caos existente en los centros hospitalarios públicos. Esa misma semana los médicos del Hospital Roosevelt exigieron la renuncia del ministro Rayo por su incapacidad para solucionar la debacle de la red hospitalaria.

La crisis ha obligado a los hospitales a recurrir a la caridad pública, y las

instituciones de la oligarquía han empezado a lucirse haciendo donaciones. La Fundación Juan Bautista Gutiérrez, de Corporación Multiinversiones, anunció el 25 de noviembre que donará al Hospital Roosevelt Q 1 millón, y que abrirá una cuenta bancaria para que la población en general haga sus donaciones. La fundación Castillo Córdova, de la Corporación Castillo Hermanos, había hecho lo propio el 20 de noviembre, donando Q 1 millón en medicamentos. A inicios de diciembre la Cámara de Industria de Guatemala hizo un donativo de pañales para niños y adultos a los hospitales nacionales. Resulta despreciable que la misma oligarquía que con su negativa a pagar impuestos y su imposición de un Estado débil ha causado la enorme crisis de los servicios públicos, ahora quiera aparecer como la gran benefactora de la población; su hipocresía no tiene límites.

El 8 de diciembre, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de salud de Guatemala, bloquearon carreteras en el interior y realizaron una caminata en la capital, exigiendo el pago de salarios, la renovación de contratos y el abastecimiento de los centros hospitalarios.

Para agravar la situación, el presupuesto 2016 aprobado por el Congreso el 30 de noviembre, contempla una disminución de Q 1 mil millones para el Ministerio de Salud.

Las perspectivas para 2016 no son nada halagadoras. Sin duda la crisis continuará. Las y los trabajadores y médicos del sistema de salud pública deben prepararse para continuar la lucha. Y la primera medida es lograr la unidad entre médicos y trabajadores, incorporando además a la población, a través de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares en un solo frente que de la batalla por un servicio de salud estatal eficiente, sólido y gratuito. ■

PRESUPUESTO 2016: MAYOR INCREMENTO A DEFENSA Y SEGURIDAD

Por Ricardo Velásquez

Desde el golpe de estado, sin duda alguna que el que ha pagado la enorme factura del costo de la misma, han sido los trabajadores, tanto públicos como privados. Los aumentos al salario mínimo han sido miserables y avalados por los Secretarios Generales de las Centrales Obreras, en un afanado apoyo a la gobernabilidad de los gobiernos sucesivos de Porfirio Lobo y de Juan Orlando Hernández. En el resto de los trabajadores, no se han dado aumentos o en todo caso, no son acordes al índice de inflación. Pero aunque se hayan otorgado míseros aumentos, la generalidad ha sido el estancamiento de los salarios y la disminución vertiginosa de la capacidad de adquisición de la moneda.

El gobierno actual de JOH, se ufana de disminuir el déficit fiscal y de disminuir los asesinatos en el país. Sin embargo, la disminución del déficit fiscal lo ha logrado a consecuencia de los despidos masivos de los empleados públicos sin pagar los derechos laborales, o bien, incrementando diversos impuestos que generalmente van dirigidos a la clase media o al mismo sector trabajador. Según el gobierno de JOH, el tema de seguridad fue una promesa de campaña, y por ellos es prioridad incrementar el presupuesto. Así lo manifestó el secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato "El apoyo a las secretarías de Seguridad y Defensa es un compromiso de campaña del presidente Juan Orlando Hernández... Cuando se analiza el presupuesto anterior versus el presupuesto 2016 enviado al Congreso Nacional, se ve que cuatro secretarías son las que más aumentaron sus asignaciones: Seguridad, Defensa, Educación y Salud". EH (29/11/2015).

Aunque la demagogia es evidente en el Ministro de Finanzas, ya que por todos es conocido que el magisterio apenas recibió

un aumento miserable en julio del 2012, y los trabajadores de la salud igual suerte han corrido. Si han destinado mayores recursos a Salud y Educación, seguro han sido para justificar gastos en programas ficticios o en empresas de maletín.

Para Hugo Noé Pino, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) "el sector de defensa y seguridad está recibiendo el más fuerte aumento. Seguridad recibe un 58%

Ejecutivo, las secretarías de Seguridad y Defensa son las que se llevan un buen incremento del presupuesto del 2016, en detrimento del resto de los sectores laborales. El supuesto aumento que pretenden asignar a partir del segundo semestre no es más que demagogia, de cara a las elecciones internas de marzo del 2017. El otro aspecto que no queda claro es la forma en que se asignará dicho aumento.



En cambio, el Diputado Edgardo Casaña, a través del Congreso Nacional, envió un anteproyecto de Ley para otorgarle un aumento salarial a los docentes, decisión que los diputados definirán en la fecha que aprueben el presupuesto del 2016.

Seguro que cualquier aumento que otorgue el Ejecutivo y el Congreso Nacional no será acorde con el costo de la vida, por eso se vuelve imperativo que la clase trabajadora se organice e inicie una estrategia para obtener un aumento salarial que

le permita vivir dignamente. El aumento salarial debe ser otorgado desde enero y no a mitad del año como pretenden los gobernantes.

Todas las trabajadoras y trabajadores públicos deben organizarse y generar movimientos de lucha, a estas luchas hay que sumar a los trabajadores de la empresa privada, ya que también son extremadamente explotados. Los sectores laborales de Salud y Educación deben ponerse a la cabeza en esta exigencia. Es impostergable superar las direcciones traidoras de las Centrales Obreras.

Según el Icefi los sueldos y salarios, representan el 32.8% del presupuesto de 2016, mientras la deuda pública representa el 26.6%. Y para el programa de inversión pública apenas tiene 5.8% del presupuesto proyectado.

Según el mismo Icefi para el próximo año se ha anunciado la posibilidad de incrementar los salarios hasta en un 4.8% a partir del segundo semestre teniendo disponibles L1,318.5 millones para la administración central.

Solo la organización y movilización de los trabajadores alcanzará aumentos más justos

¡Por un aumento general de salarios desde enero y acorde al costo de la vida!

No queda duda, que a propuesta del



CORRUPCIÓN Y DEPORTES

Por Maximiliano Fuentes

La semana pasada fueron arrestados en Suiza varios dirigentes deportivos de las distintas confederaciones de fútbol, entre ellos destacan el hondureño Alfredo Hawit, Presidente de la CONCACAF y Ángel Napout dirigente paraguayo de la CONMEBOL y Vice-Presidente de la FIFA.

En los meses anteriores, habían sido giradas varias órdenes de captura por varios organismos de justicia de los Estados Unidos contra varios dirigentes por estar implicados con casos de corrupción y soborno. También, se le había suspendido de la presidencia a Josep Blater de la FIFA y a Michel Platini de la UEFA de forma temporal.

Todo este proceso de acusaciones contra los dirigentes deportivos de la Federación deportiva más rentable del mundo ha sido llamado FIFAGATE, haciendo una clara alusión al polémico caso que tuvo lugar en Estados Unidos en la década de 1970.

Para esa ocasión, se saqueó de las oficinas de Watergate –Sede del Comité Nacional del Partido Demócrata- varios documentos. Las acciones fueron encubiertas por la administración de Richard Nixon. Sin embargo, el Congreso inició una investigación, en el que el gobierno de Nixon no quiso colaborar, lo que condujo a una crisis institucional.

Desde entonces, varios opositores políticos y funcionarios fueron considerados sospechosos. Nixon ordenó el acoso a grupos de activistas y figuras políticas, utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia -FBI, CIA y otros-. El escándalo destapó múltiples abusos de poder y concluyó en la renuncia de Nixon el 9 de agosto de 1974.

La magnitud del caso Watergate fue tan significativa que se empezó a usar dicho sufijo (gate) para referirse a actividades clandestinas e ilegales. Son

varios los casos que han sido catalogados como tal: Reutergate -el fotógrafo Adnan Hajj fue acusado de manipular imágenes- o los famosos Petroaudios, los cuales fueron conocidos en el mundo entero como 'Petrogate'.

Debido a las acusaciones libradas contra los funcionarios de la FIFA, es un tema que compromete a varios países del mundo y que, según parece, va a



desmantelar a una serie de delegados y ejecutivos que habrían recibido cuantiosos sobornos para su beneficio.

La reproducción de la corrupción

Las prácticas y hábitos inadecuados de los administradores del Estado se evidencian en la clara participación de los funcionarios en crímenes por blanqueo de capitales y distribución de drogas en los Estados Unidos. Sin dejar de mencionar el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otras instituciones del Estado. Son cientos de personas que han acrecentado de forma desproporcionada sus fortunas, y por la forma en que se conducen el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, los casos permanecen impunes, y en algunos casos se absuelven los procesos, tal y como ocurrió con el Ex Presidente de la República Rafael Leonardo Callejas, quien recibió más de siete cartas de libertad por las acusaciones recibidas durante su

gestión como Presidente de la República. Por cierto, acusado de forma reciente por haber recibido sobornos por los funcionarios de la FIFA durante su gestión como Presidente de la FENAFUTH.

El Presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth) y vicepresidente de la FIFA, Juan Ángel Napout a quienes se les implica de los delitos de fraude, soborno, lavado de activos, entre otras acusaciones. Paradójicamente, son las instituciones del imperialismo norteamericano las que ha librado el proceso de captura contra varios funcionarios de las federaciones de la CONCACAF, dado que los gobiernos locales son incapaces de impartir justicia. En ese sentido, el gobierno de los Estados Unidos ha girado la orden de extradición contra Rafael Leonardo Callejas, Ex Presidente de la República, que por cierto, pretendía participar como candidato a la presidencia en el próximo proceso electoral.

La política del imperialismo norteamericano

Sin lugar a dudas, los Estados Unidos de América tiene una política muy clara para la región la centroamericana, y consiste en iniciar procesos de extradición y de arresto contra todos los funcionarios corruptos o implicados con el crimen organizado y el narcotráfico. El arresto de Otto Pérez Molina –Ex Presidente de Guatemala- y varios de sus funcionarios se da en este marco. Evidentemente, lo anterior responde a un enorme temor de perder el control y la estabilidad de un territorio estratégico y de su propio control, lo que pretenden evitar en un enorme estallido social que concluya con una guerra civil o una revolución. Sin embargo, hace falta iniciar un proceso de movilizaciones para exigir el verdadero castigo para aquellos que han extorsionado e enriquecido de forma ilícita con el dinero del Estado de Honduras. ■

2015 CERRARA CON CIFRAS RECORD DE HOMICIDIOS

Por Alberto Castro.

Las cifras de homicidios de este año que está por finalizar ya superan los 6,000 asesinatos, un evidente crecimiento con relación al año pasado el cual cerró con 3,912, no cabe ninguna duda que tales números son el reflejo del crecimiento de la violencia y delincuencia, y ejemplo de ello es lo insólito de que entre el 1 de enero del 2015 hasta el pasado 15 de noviembre la ola delincencial ha provocado 450 asesinatos múltiples a nivel nacional. Según la Fiscalía General de la República (FGR), el año pasado en ese mismo período solamente se reportaban 233 masacres, lo cual indica que existe un incremento del 93.13 % de este tipo de hechos delictivos comparado al 2015, otro dato es la cifra record de fallecidos en una misma masacre el cual es de 14.

En tales condiciones se llega al final de este año, en un país dominado por la polarización política reengendrada por el nuevo bipartidismo FMLN-ARENA, país que nuevamente tiene un crecimiento de apenas el 2% del PIB, sumado a los datos expuesto no cabe ni la menor duda que El Salvador está en un caos, y la fuerzas políticas del régimen que representan a los diferentes sectores burgueses no son capaces de brindar beneficios a las amplias masas. La inseguridad es un malestar para la mayor parte de la población, que no ha sido atendido y mucho menos resuelto.

Las maras y pandillas son la manzana de la discordia

El sangramiento se ha debido en muchos casos a la actividad de las maras y pandillas, las cuales arremeten entre sí, contra las autoridades policiales y militares y contra el pueblo salvadoreño, el GOES por su parte ha emprendido un combate frontal a través de la PNC y Fuerza Armada, ello ha empeorado la situación haciendo que estas organizaciones eleven

su agresividad, en otro extremo se ha dado la aparición de grupos de exterminio que dicho sea de paso la Fiscalía General de la Republica no ha sido investigado como debería. En medio de este fuego cruzado se exponen miles de trabajadores todos los días, siendo víctimas del fuego proveniente de cualquier parte, en este



sentido se evidencia con toda claridad que la inseguridad no ha bajado, pese a la reducción del índice de homicidios del mes de septiembre.

Expectativas oscuras y sin salida

La MS-13 y pandilla 18 que son las principales agrupaciones juveniles del país han crecido su número de miembros de manera considerable en este último año, la tregua que finalizo justamente a inicios de año dejo a estos grupos bien fortalecidos, constituyéndolos como poderes territoriales operando mientras son dirigidas desde los recintos carcelarios, la acción ejercida en los barrios y colonias ha dado lugar a disputas, ya que detrás del control esta el manejo económico que dejan las rentas y extorciones que hacen. En vísperas de un nuevo año las expectativas en torno a ello parecen no ser las más positivas, las maras y pandillas se han constituido como organizaciones fuertes, que poseen un alto grado de organización y disciplina, que pese a la represión de la PNC y F.A no se han desmovilizado y forman parte

de una decadencia económica, política y social del capitalismo en El Salvador y Centroamérica.

Los gastos que implican para el gobierno el sostenimiento del aparato de seguridad han sido tan elevados de tal manera de que los gatos del plan especial de seguridad "El Salvador seguro", se echaron andar con los impuestos por el uso de servicio de telecomunicaciones, en esto último tanto el partido oficialista como los demás del régimen se dieron la mano prefiriendo cargar sobre los bolsillos de pueblo el mantenimiento de los planes de seguridad en vez de tocar al gran capital, el pacto de Ataco ha sido un show que hasta la fecha no ha rendido frutos. ¿Que nos depara para el 2016 en materia de seguridad?

Paremos la violencia, luchando

No se pueden descartar más impuestos, ni una reducción significativa, aunque el descenso del mes de septiembre fue del 35% no puede decirse aun que se va por el rumbo correcto, de hecho es ahí donde se muestran a los ojos de todo el mundo que fue un error sacarle a las masas populares el dinero vía impuesto para sostener las políticas de seguridad, de igual forma la salida militar al conflicto no es la mejor solución, ya que esto trae consigo más derramamiento de sangre, y poniendo la población civil en fuego cruzado, por lo que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que para el 2016 las organizaciones obreras, campesinas, populares, indígenas, estudiantiles, etc. Debemos exigir soluciones reales al problema de la violencia y la delincuencia, no deben de crearse mas impuesto, los costos que esta generando la violencia deben pagarlos los ricos. ■



¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS CONTRA LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA?

Por Alberto Castro.

La poca cobertura y ayuda que le da el gobierno del FMLN al sector agrícola fue fundamental para que los efectos de la sequía ocasionaran cuantiosas pérdidas económicas a la mayor parte de las familias que dependen de la agricultura para vivir, tanto así que el 37 % de las familias que se dedican a la agricultura y que fueron afectadas por segundo año consecutivo por la sequía meteorológica han optado por comprar sus alimentos al crédito o pedir alimentos prestados, según el diagnóstico efectuado entre junio y julio por la oficina del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el país, en coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).

La misma opción fue tomada por 58 % de hogares con jornaleros que se dedican principalmente a trabajar en fincas de café y no poseen tierras. Antes de que finalizara el periodo de invierno la sequía y luego las lluvias excesivas afectaron a los cultivos financiados con \$16 millones del BFA. Según la presidenta de dicha institución, Ana Lilian Vega las estimaciones en pérdidas de créditos otorgados por el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) para la siembra de granos básicos durante 2015, debido al cambio climático, rondan los \$16 millones que equivalen aproximadamente la mitad del monto total otorgado por el BFA en el año.

Este monto se vio afectado por la sequía y posterior exceso de lluvia, que enfrentaron los productores durante 2015. “Los préstamos para este año se dan en el pago de cosecha del próximo año. Las pérdidas se tienen estimadas en

aproximadamente \$16 millones”, además dijo “En cantidad de personas es más, pero no todas perdieron lo mismo. Hay personas que perdieron el 90 %, otras el 10 %; en promedio, se perdió más o menos el



45 o 40 %”, indicó. Como los créditos se desembolsaron en mayo y deben pagarse hasta abril del próximo año, y ya se tienen estimaciones de pérdidas, Vega explicó que la institución está solicitando el uso del sistema de garantías que facilita el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal). Con lo manifestado por la funcionaria se puede deducir que no se están tomando medidas importantes que medien los efectos económicos que ha producido la sequía que ha afectado a la región, si bien el BFA ha otorgado créditos a pequeños y medianos productores, esta institución bancaria no ha girado concesiones ante los estragos que ha dejado este fenómeno natural.

Medidas urgentes a tomar en cuenta

El Presupuesto General de la Nación fue aprobado por \$4,860.8, de los que al ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), le otorgaron \$100 mil adicionales; sin embargo este rubro forma parte de los recortes presupuestarios para sostener los planes de seguridad, los créditos otorgados por el BFA anticipadamente

estaban en situación de riesgo de perderse debido a que desde el ejecutivo no fue dirigida ninguna medida para evitar pérdidas de los productores, contrario a ello no advirtió, ni presentó a nivel nacional los estudios pertinentes del caso, de ahí se derivan los resultados negativos de las pérdidas de las cosechas.

La producción nacional de granos básicos actualmente no es capaz de abastecer el consumo nacional, por lo que siempre se recurre a la importación, esto es aprovechado por comerciantes mayoritarios que ocasionan especulación y acaparamiento. El MAG en el gasto 2016 solo contempla continuidad de los que hasta ahora se tiene, pero no se han presentado proyectos que eviten el hundimiento económico de las familias agricultoras, no esclarece

aun hasta qué punto puede ser una realidad el uso del sistema de garantías por parte de Bandesal, se tiene un enorme problema al que no se le está dando la atención necesaria, muchos agricultores han tenido pérdidas de sus cosechas y por lo tanto presentarían inconvenientes a la hora de pagar los créditos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), manifestamos que el uso del sistema de garantías debe ser una realidad a la cual puedan apelar quienes perdieron la producción agrícola, por ello ante los efectos de la sequía debemos exigir el no pago de los préstamos realizados por los campesinos pobres a las financieras. Así mismo exijamos el no pago de granos básicos en concepto de trueques a través de Alba El Salvador hacia la transnacional PETROCARIBE, debemos exigir que la producción agrícola del área centroamericana sea principalmente para satisfacer las necesidades del pueblo centroamericano. ■



LA CUMBRE COP 21: EL CAPITALISMO CONDUCE A LA BARBARIE

Por Ben Céspedes

En medio de un dispositivo de seguridad sin precedentes para una cumbre de este tipo, los presidentes y los ministros de casi 150 países del mundo se encuentran en París para discutir de la crisis ambiental en la que se encuentra sumida nuestro planeta.

La COP (por sus siglas en inglés, conferencia de las partes) es organizada por las Naciones Unidas

En los últimos diez años se han producido ya varias cumbres “ de la Tierra” para tratar de lograr un acuerdo y así disminuir las emisiones de CO2 y otros aspectos sin llegar a nada.. Esta cumbre parisina parece que levanta algunos entusiasmos pero de hecho la realidad es más compleja que pasar de cumbre en cumbre.

El capitalismo como modelo de producción anti-ambiente

En estas últimas cumbres, se ha producido un nuevo fenómeno donde las grandes transnacionales han copado el espacio para llevar adelante una estrategia de marketing y así presentarse como una alternativa verde, sostenible, una

capitalismo verde que podría resolver la crisis en la que se encuentra el ambiente.

Sin embargo nada más lejos de la realidad que la presión de estos lobbys de las transnacionales. Para dar un ejemplo de las contradicciones flagrantes de esta cumbre, entre los patrocinadores oficiales de la misma se encuentran los siguientes grupos industriales Engie (ex GDF Suez), EDF, Renault Nissan, Suez Environnement, Air France, ERDF, Axa, BNP Paribas, Air France, LVMH, Ikea. Todos estos grupos enfrentan serios cuestionamientos por su papel en la polución y el recurso a energías

fósiles más contaminantes para mantener y aumentar sus márgenes de ganancia.

Los escándalos que han puesto en relieve los métodos fraudulentos con los cuales las compañías logran burlar los controles (controles que muchas veces han sido diseñados sobre medida por los mismos) y así pasar mercaderías defectuosas y peligrosas para el ambiente y la salud de las personas. El caso de VW, con el cual lograron alterar los sistemas electrónicos de los automóviles para que las emisiones fueran menores a las reales, no es si no uno de muchos que se han venido produciendo desde hace siglos. Este caso como se vio luego, no fue el único dentro de la industria del automóvil.

Pero esto es solo un síntoma de la

se ha detenido, siendo el petróleo uno de los recursos vitales, junto con otros combustibles fósiles para mantener la producción de forma barata y sin tener que invertir en el desarrollo de otras formas de energía que impedirían su control hegemónico. El caso de la energía nuclear como fuente de energía y como fuente de poder militar refleja el estado de las relaciones de poder la burguesía y del imperialismo.

En el aspecto que corresponde a las emisiones de efecto invernadero, a la cabeza se encuentran los países que concentran el grueso de la producción industrial del planeta. En la primera posición se encuentran China, con un 25,4% de las emisiones, seguido por los

Estados Unidos, con un 14,4% . En la tercera posición se encuentra la Unión Europea, con un 10,2% .

Pero cuando se ve las emisiones per cápita; la lista sufre ligeras modificaciones en el orden, siendo los Estados unidos los que encabezan la lista con un 19,9 toneladas por cabeza por año, seguido por Rusia, con 16,2; Japón con 10,5; Irán con 9,4 y la Unión Europea con 8,8 toneladas per cápita. (datos tomados del World Resources



forma como el capitalismo traduce su relación con la naturaleza. Los datos que se tienen demuestran que, este modo de producción, no es compatible con la naturaleza. Lejos de esos, la reduce a una simple mercancía de la cual obtiene todo el beneficio posible hasta llevar al agotamiento del recurso y así mantener al máximo la tasa de ganancia.

El imperialismo impuso en sus diferentes estadios una explotación anárquica de los recursos en todos los continentes. Los recursos saqueados a los países coloniales y semi coloniales no

Institute)

De estas emisiones los porcentajes que son relacionados con las actividades industriales del capitalismo no dejan lugar a dudas sobre su rol. Desde cerca ya tres siglos, estas emisiones no dejan de aumentar. El 76% de estos gases de efecto invernadero son del CO2 provenientes de la actividad industrial y comercial, ligadas principalmente al transporte y la quema de combustibles fósiles. En segundo lugar el metano representa el 16% de las emisiones. Estas son producidas por la agricultura industrial, la producción



de petróleo y otros combustibles fósiles así como las boñigas y otros desechos animales.

Este hecho hace que las dudas sobre la efectividad de la COP21 se diluyan conforme la hora de firmar un acuerdo se acerca.

¿Es posible un capitalismo verde?

Muchas organizaciones dentro del campo ecologista presentan un plan reformista para solucionar el problema ambiental. Las multinacionales, los gobiernos de los países industrializados no dejan de enarbolar y tomar medidas en ese sentido, con tal de demostrar que son ecológicamente correctos. Sin embargo el núcleo del que parte todo este problema es el sistema de producción. No es de extrañar que en vista de la magnitud del problema, hasta el Vaticano se haya manifestado por medio de la Encíclica Laudato Si. En esta el papa Francisco concuerda con varios de los grupos que no ponen en cuestionamiento el modo de producción y cae en el discurso de “cambiar hábitos de

consumo” y evitar el consumismo, además de apuntar otras generalidades sin llegar a la raíz del problema.

Por otro lado, el discurso oficial apunta al individuo y sus hábitos de consumo que



lo convierten en un contaminador por sus escogencias. Esto revela el cinismo de la burguesía que aprovecha para crear mercados alternativos y etiquetar productos “bios” para satisfacer la demanda del mercado. En otros sectores, grupos organizados ofrecen alternativas “verdes” para el consumo. Sin embargo todo esto tiene un carácter elitista debido

que los precios son determinantes para el acceso a ese tipo de productos mas amigables con el ambiente, sin que por eso lo sean totalmente.

En este discurso también existe el componente ideológico que hace que la burguesía siga empoderando su percepción de mundo en todos los aspectos de la vida. Marx decía que “no es cierto que el trabajo sea la fuente de toda riqueza, es solamente el padre, la naturaleza es la madre” (Crítica al programa de Gotha)

Para poder acceder a una planificación de la economía con base en las necesidades de la población y del respeto del ambiente para que este no se transforme en nuestra principal amenaza, es necesario entonces que la naturaleza, propiedad privada de la burguesía sea liberada también del yugo burgués. Esto nos deja de nuevo ante el dilema que ha sido esbozado desde hace tiempo pero que cada hora se hace más elocuente: socialismo o barbarie no es una consigna solamente, es el dilema que afronta la humanidad cada día. ■

MARXISMO Y NATURALEZA

En los “Manuscritos” de 1843-1844 Carlos Marx se refiere a la naturaleza como “el cuerpo inorgánico del hombre”. En el Libro I de El Capital “Proceso de trabajo, proceso de valorización”, Marx explica mejor sus ideas: “En primer lugar, el trabajo es un proceso entre hombres y naturaleza, un proceso en el que, mediante su acción, el hombre regula y controla su intercambio de materias con la naturaleza. Se enfrenta a la materia de la naturaleza como un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales pertenecientes a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, para apropiarse de los materiales de la naturaleza en una forma útil para su vida. Al actuar mediante este movimiento sobre la naturaleza exterior a él y cambiarla, transforma al mismo tiempo su propia naturaleza.” (El Capital, Libro I, cap. V, Pág. 241.)

Según Marx el socialismo debería rectificar estos productos destructivos del capitalismo. “Con el predominio cada vez mayor de la población urbana, concentrada en grandes centros, la producción capitalista acumula, de un lado, la fuerza motriz de la sociedad, mientras que de otra parte perturba el metabolismo entre el hombre y la tierra. Es decir, el retorno a la tierra de los elementos de ésta consumidos por el hombre en forma de alimento y de vestidos, o sea, la condición natural eterna de la fecundidad permanente del suelo.” (El Capital, Libro III, tomo III, Pág. 215)

Sobre el problema de la reutilización de los residuos vuelve en el libro III de El Capital, en la sección destinada a la economía en el empleo del capital constante, destacando a la vez el aporte de la ciencia en su reutilización, como su irracional despilfarro: “Los excrementos del consumo son muy importantes para la agricultura. Por lo que respecta a su utilización, la economía capitalista efectúa un despilfarro colosal en Londres, por ejemplo, no saben hacer nada mejor con el abono de 4 ½ millones de seres humanos que emplearlos, con gastos inmensos, en apestar el Támesis.”

Y más adelante: “Y todo progreso de la agricultura capitalista no es sólo un progreso en el arte de esquilmar al obrero sino también en el arte de esquilmar a la tierra, y cada paso que se da en el incremento de su fertilidad dentro de un período de tiempo determinado, supone a la vez un avance en la ruina de las fuentes permanentes de esta fertilidad.

(...) La producción capitalista sólo desarrolla, por tanto, la técnica y la combinación del proceso social de producción al tiempo que socava las fuentes originarias de toda riqueza: la tierra y el trabajador.” (El Capital, Libro I, tomo II, Pág. 251.)

La tendencia del capitalismo a destruir la naturaleza, fenómeno que Marx describió de manera general en sus obras, se ha transformado en un verdadero apocalipsis de la humanidad. ■

NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1922:

SE REALIZA EL IV CONGRESO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA

Por Antonio Davanellos

En el contexto de la profunda crisis del capitalismo mundial, en el que cualquier forma de salida dirigida por las clases dominantes representa alguna versión de la barbarie, tenemos que volver a mirar nuestra historia y tradiciones.

Hay analogías importantes entre los tiempos que estamos viviendo y el período en el que tuvo lugar

el IV Congreso de la Internacional Comunista (Comintern). Ese período (Noviembre-Diciembre de 1922) se define por la persistencia de la crisis capitalista internacional, el retroceso de la ola revolucionaria desatada por la Revolución de Octubre, la merma en la voluntad generalizada de la clase obrera para romper las barreras del capitalismo,

el nacimiento de corrientes políticas extremadamente reaccionarias y peligrosas (el fascismo, el nazismo, el belicismo y el nacionalismo).

Pero también hay diferencias importantes entre aquel período y hoy. En 1922, a pesar del reflujo del estado de ánimo revolucionario, la existencia misma de la República Soviética de Rusia sirvió como un faro para la clase obrera internacional. Proporcionó una orientación ideológica clara, la definición de las tácticas y políticas de los partidos revolucionarios. A pesar del retroceso de las luchas obreras en relación con los años de apogeo de 1917 a 1921, esas luchas se mantuvieron a un nivel mucho más alto que hoy en día internacionalmente.

A pesar de las traiciones sucesivas de los partidos socialdemócratas, los partidos de la clase obrera de la época eran mucho más obreros (en términos de sus estrechos vínculos con grandes sectores de la clase), mucho más fuertes que las actuales ruinas socialdemócratas y que las escasas fuerzas de la izquierda comunista actual.

Por último, la propia existencia de la Internacional Comunista supuso

organización de los partidos socialistas y laboristas constituida en París el 14 de julio de 1889. Fundada después de la victoriosa Revolución Rusa de 1917, la Comintern reunió a los que se habían opuesto a la guerra imperialista y apoyaban el nuevo gobierno de los trabajadores en Rusia.

Los partidos socialdemócratas habían apoyado patrióticamente a sus propios gobiernos burgueses al comienzo de la Primera Guerra Mundial, había



colaborado en la derrota de la revolución en Alemania, y eran cómplices del asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. La aparición de la Internacional Comunista coincidió con una ola de luchas

una diferencia crucial: Proporcionó un centro internacional para el movimiento revolucionario de la época; un centro en el que se podía hacer un análisis en profundidad, tener una discusión honesta, directa, libre y democrática sobre temas cruciales de la estrategia y la táctica. Las actas de los cuatro primeros congresos de la Tercera Internacional son prueba de ello.

Una nueva Internacional revolucionaria

Durante su primer (1919) y segundo (1920) Congresos, la Comintern consolidó y reforzó la ruptura entre las corrientes revolucionarias y reformistas que habían existido en el seno de la II Internacional, la

revolucionarias en toda Europa en respuesta al éxito de la revolución rusa, una ola que los dirigentes de la Comintern esperaban organizar y dirigir para crear estados obreros más allá de las fronteras de Rusia.

Pero ¿qué debían hacer las secciones de la Internacional, los jóvenes y relativamente inexpertos partidos comunistas, si la situación objetiva cambiaba? ¿Qué pasaría si la ola revolucionaria retrocediese y la estabilización allanase el camino para una contraofensiva capitalista? Este giro en las condiciones objetivas ya era perceptible en 1921 y, al año siguiente, era un hecho incontrovertible. El III Congreso (junio-julio de 1921) abordó esta cuestión crucial. El IV Congreso (noviembre-diciembre de



1922) llevó a su conclusión este trabajo. Y el elemento esencial de la respuesta fue la táctica del frente único.

El frente único

Durante el IV Congreso, Lenin (ya gravemente enfermo) y León Trotsky, participaron activamente en la dirección de la delegación bolchevique, junto con Gregory Zinoviev, Nikolai Bujarin y Karl Radek. La delegación rusa intervino en la discusión con toda libertad y en absoluto de manera “monolítica”, tratando de fomentar de este modo la expresión de las diferentes opiniones existentes en las distintas secciones de la Internacional. Sin embargo, la delegación actuó unida cuando llegó el momento de tomar decisiones.

Lenin y Trotsky, que habían defendido previamente la formación de una corriente comunista independiente opuesta a la socialdemocracia, libraron una batalla política durante el IV Congreso para clarificar la táctica del frente único y persuadir a la Comintern que adoptase dicha táctica.

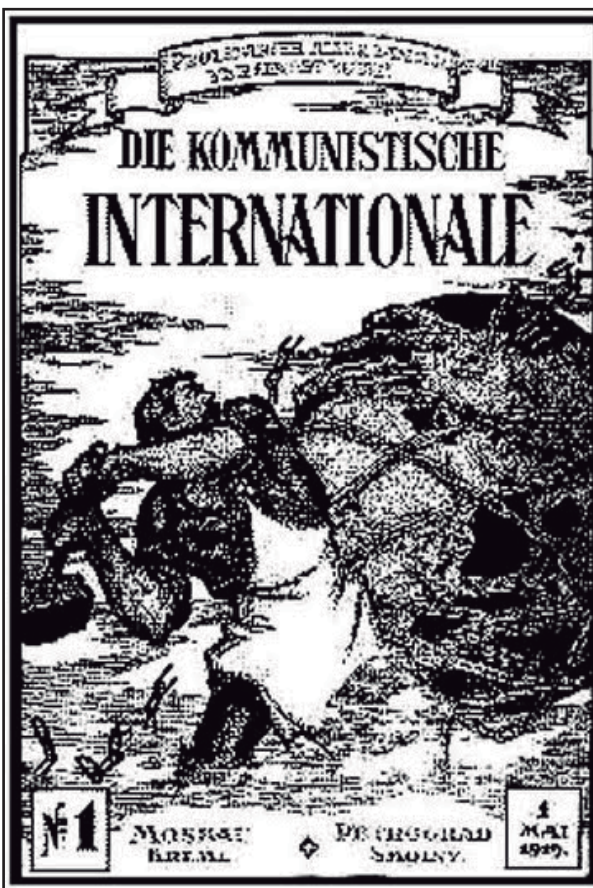
Ambos se enfrentaron a los partidarios de una política de “ultraizquierda”, tanto en el interior del partido bolchevique (Zinoviev y Bujarin) como en las otras secciones de la Internacional (la minoría alemana dirigida por Ruth Fisher y Arkadi Maslow, la delegación italiana encabezada por Bordiga, y otros). Tenían el apoyo de la mayoría de Alemania, que, ante los errores desastrosos del período anterior (la fracasada “acción de marzo” de 1921 inspirada en la teoría de la “ofensiva”) se había reorientado hacia la lógica del frente único.

La esencia de la política de frente único era que los partidos comunistas, en una situación en la que no estaba al orden del día una lucha inmediata por el poder, y cuando la mayor parte de la clase obrera todavía permanecía en las filas de los viejos partidos reformistas socialdemócratas, no debían oponerse artificialmente a la unidad de la clase obrera. Por el contrario, debían proponer alianzas con los partidos socialdemócratas -al tiempo que conservaban su independencia y su derecho a criticar los límites de los

reformistas- con el objetivo de conseguir reivindicaciones económicas y políticas inmediatas.

Como Trotsky planteó que en el año 1922: “El problema del frente único, a pesar del hecho de que es inevitable en esta época una división entre las diversas organizaciones políticas que se apoyan en la clase obrera, surge de la necesidad urgente de garantizar a la clase obrera la posibilidad de un frente unido en la lucha contra el capitalismo”.

El IV Congreso llevo hasta el final la



evaluación de la situación internacional, que se definió por la ofensiva capitalista y el reflujo de la lucha revolucionaria de la clase obrera. En esta situación, el Congreso consideró que era imprescindible hacer un llamamiento a la unidad en la acción de los partidos obreros como condición previa para el éxito de la lucha defensiva del movimiento obrero.

Sobre esta base, el Congreso aclaró algunos desacuerdos sobre el frente único surgidos después del Tercer Congreso, en concreto:

- El frente único debe ser apoyado por los partidos comunistas sinceramente y

no como un movimiento táctico hipócrita destinado sobre todo a ganar miembros de los partidos socialdemócratas reformistas.

- El frente único, al tiempo que defiende y apoya las luchas sindicales, económicas específicas de nuestra clase, no se limita a estas cuestiones. Se puede y debe extenderse a la lucha política en general.

- El frente único probablemente comienza con temas de actualidad concretos, pero es un error poner un límite temporal para su desarrollo. Es una política para “todo un período, incluso toda una época.”

- El frente único debe ser apoyado con el método de las “reivindicaciones transitorias”: reivindicaciones específicas que, gozando del apoyo de la mayoría de los trabajadores, pueden convertirse en luchas unitarias inmediatas.

- El frente único debe llevarse a cabo en gran parte “desde abajo”, pero la negativa a apoyarlo “desde arriba” y la aversión hacia “las negociaciones entre las direcciones” debe ser rechazada como “inmadurez infantil.”

- El frente único es una política para una batalla defensiva, una política de apoyo a una guerra para defender “cada centímetro de tierra.” Esta política supone el abandono de la pasividad sectario-propagandista. Al mismo tiempo, se pretende ayudar a la clase obrera a comprender realmente las diferencias entre reformistas y revolucionarios, a través de la experiencia en vivo de las luchas.

Era evidente para todos los que tomaron parte en este debate que la línea política del frente único conlleva graves peligros de subordinarse o acomodarse al reformismo. Para evitar este escollo, Lenin y Trotsky insistieron en dos puntos:

- Una explicación detallada y clara de la táctica del frente único, que nunca es presentada por la Comintern como un método para una transición pacífica y parlamentaria al socialismo. Se presenta más bien como un método posible para la organización de la lucha defensiva de la clase obrera, y una transición lo más rápida posible al contraataque.

• El principio inviolable de mantener la independencia de las fuerzas revolucionarias, la negativa de los partidos comunistas a disolverse en las formaciones políticas de los reformistas o “centristas” más a la izquierda.

A partir de esta lógica del Frente Único, a saber, el esfuerzo por agrupar las mayores fuerzas posibles en la lucha para derrocar la ofensiva del capitalismo, el IV Congreso tomó decisiones sobre una serie de cuestiones políticas cruciales planteados por la situación. Se sentaron las bases para una resistencia concertada, masiva, al fascismo, criticando la subestimación “ultra-izquierdista” de esta amenaza (Amadeo Bordiga) y la táctica de igual oposición tanto a los fascistas como a los partidos socialdemócratas.

El Congreso sentó las bases para un trabajo eficaz y a gran escala para la liberación de las mujeres mediante el reconocimiento de la importancia de las opiniones de Clara Zetkin, que habían sido ridiculizadas en el pasado, y mediante la definición

de tareas específicas en este campo para las secciones de la Internacional.

El Congreso sentó las bases para un compromiso a gran escala y eficaz con las luchas anticoloniales, antiimperialistas, reconociendo que los “pueblos del Oriente” son aliados valiosos en la lucha de la clase obrera por la emancipación social.

Visto de esa manera, en general, el IV Congreso de la Internacional Comunista fue un “momento” importante de madurez que trató de orientar a la izquierda revolucionaria internacional hacia un enfoque activo, dejando atrás la pasividad representada por la llamada “paciencia revolucionaria”, a la espera de días mejores.

Esto se aplicaba a las luchas concretas en los países donde las fuerzas de la Comintern estaban presentes. Su objetivo era la ampliación del frente de los trabajadores, que se abría a las cuestiones de la opresión (derechos democráticos, la

liberación de la mujer, etc.). Se refería a las cuestiones de la lucha política (posición sobre el fascismo, el gobierno). Abordaba la lucha global, con las posiciones adoptadas en relación a la guerra y las revoluciones anticoloniales.

Por último, proporcionó un modelo de política de transición, que partía de la necesidad de organizar luchas defensivas unidas, establecía una hoja de ruta hacia la transición más rápida posible a una contraofensiva, y mantiene viva la perspectiva de la emancipación socialista.

El gobierno obrero

Durante el IV Congreso, el debate



sobre el frente único se centró en la cuestión del gobierno de los trabajadores, es decir, la posibilidad de un gobierno apoyado por los partidos obreros de izquierda, que surge en el contexto del capitalismo, a través de una combinación de luchas masivas desde abajo y una crisis parlamentaria.

A pesar de las fuertes objeciones, se aprobó la consigna de un gobierno de los trabajadores, como “consecuencia de la lógica del frente único”. Fue aprobada como una forma adecuada de propaganda general en todas partes, y como una perspectiva política inmediata en aquellos países donde la crisis de los partidos burgueses creasen la posibilidad de formar un gobierno de los trabajadores, aunque no existiesen condiciones reales para un auténtico poder obrero.

También se aprobó una “tipología” de variantes de un gobierno de los trabajadores. Esta clasificación implicaba diferentes tareas para los partidos

comunistas en función de la situación: apoyo parlamentario, tolerancia, apoyo crítico, o participación en ciertas condiciones.

Esta orientación no fue de ninguna manera una aceptación del “cretinismo parlamentario”. Por el contrario, la Internacional Comunista aprobó el concepto de gobierno de los trabajadores como “una posible forma de transición” hacia el poder obrero, previendo que en ciertas condiciones y bajo ciertas premisas políticas, podría conducir a una “escalada y aceleración de la lucha de clases”.

León Trotsky, el teórico de la revolución permanente, escribió algunos años después: “El objetivo del frente único solo puede ser un gobierno de frente único, es decir, un gobierno socialista-comunista, un ministerio Blum-Cachin. Esto hay que decirlo abiertamente. Si el frente único se toma a sí mismo en serio, y sólo entonces las masas populares se lo tomaran en serio, no puede identificarse con la consigna de la conquista del poder. ¿Por qué medios? Por todos los medios que conducen a ese fin. El frente único no renuncia a la lucha parlamentaria...”

El énfasis durante el IV Congreso sobre el debate del gobierno de los trabajadores ofrece una perspectiva a la posición política de la izquierda comunista, cuando se enfrentan a la cuestión central del gobierno en tiempos de aguda crisis socio-política, pero cuando la fuerza de la clase obrera no es suficiente para plantear la cuestión del poder obrero de forma inmediata.

La propuesta del IV Congreso de la Internacional Comunista describe un proceso de transición de una situación a la otra. Desde entonces, muchos han afirmado que este debate fue un lapsus desafortunado de la Internacional, que las intervenciones de Lenin, Trotsky, Zetkin y otros describían un escenario hipotético que nunca existió en la práctica. Y, sin embargo, en la historia contemporánea, la izquierda ha sido puesta a prueba en muchas ocasiones sobre esta cuestión, y ha pagado un alto precio por este vacío en su estrategia y tácticas.(...) ■



MASACRES Y CRÍMENES VIOLENTOS: LA OTRA CARA DEL NEOLIBERALISMO

Por Gerson de la Rosa

Los crímenes violentos en Honduras han aumentado de forma estrepitosa en los últimos años. La principal causa de muerte es el arma de fuego, y desde luego, se desconocen los motivos reales por las cuales miles de hondureños son asesinados de forma violenta. De acuerdo a los datos del observatorio de la violencia, que por cierto, provienen de la Policía Nacional, en Honduras se ha dado una baja significativa de los asesinatos y de los crímenes violentos en los últimos dos años, sin embargo, los medios de comunicación muestran una imagen contraria de los datos y la información proporcionada por el Estado de Honduras. Durante la última semana del mes de noviembre, fueron asesinadas de manera violenta alrededor de 26 personas en distintas regiones del país, cantidad, que en Honduras no resulta tan significativa, sin embargo lo que llamo poderosamente la atención fue la forma en que fueron asesinados, dado que fueron masacrados en grupos de siete u ocho personas a la vez. Al parecer, este tipo de dinámica sería la nueva forma en que las bandas de sicarios liquidan cuentas o saldos pendientes.

Las páginas de los diarios impresos y los canales de televisión muestran a diario las masacres y los crímenes que se cometen a lo largo del territorio nacional, y lo peor de todo, permanecen en la impunidad por el inefectivo accionar de los organismos de justicia y de investigación policial. A pesar de los esfuerzos de varios gobiernos y del propio imperialismo norteamericano por depurar la policía, aun no se logra avanzar en la detención, captura e enjuiciamiento de los oficiales que organizan desde la institucionalidad cientos de delitos.

Se reconoce la participación de altos funcionarios del gobierno y del Estado de Honduras en el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Varios alcaldes del país, diputados, jueces, oficiales del ejército y de la policía han sido recluidos por su participación en el narcotráfico, blanqueo de capitales, extorsiones y otros actos

ilícitos.

El enorme costo de la violencia

El Estado de Honduras cuenta con un enorme corpus de instituciones cuya responsabilidad es la de asegurar la seguridad: Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Nacional, Policía TIGRES, COBRAS, y organismos de reciente creación como la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), Fuerza Nacional Antiextorsión, Policía Militar del Orden Público (PMOP). A esto se le debe de sumar el Ministerio Público (MP), su Agencia de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigación a cargo de la Secretaria de Seguridad (DPI).

A pesar de lo anterior, Honduras es uno de los países de mayores tasas de crímenes violentos en el mundo. De acuerdo al Observatorio de la Violencia, durante el año de 2014 se registraron un total de 8,719 muertes por causa externa ocurridas a nivel nacional. Los homicidios siguen siendo la principal causa de muerte por causa externa con el 68.1% del total reportado. El informe sobre la percepción de la inseguridad en Honduras un 70.5% de la población cree que la inseguridad es el principal problema del país. Desde luego, esta mirada interiorizada de la inseguridad se debe a la gran campaña desatada por los últimos gobiernos de turno, que en los últimos años, se ha constituido como el principal eje de los diferentes programas de Estado.

Fracaso de los planes de seguridad

Cabe destacar que, en los últimos años el Estado ha acrecentado el presupuesto en materia de seguridad, sin embargo ha reducido de forma cuantiosa el presupuesto para cultura, deporte, salud y educación. El costo de la violencia en Honduras equivale al 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB) siendo el más alto de la región latinoamericana, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Dicho informe, por cierto titulado: “Los costos del crimen y la violencia en el bienestar de América Latina y el Caribe” señala que Honduras es “excepcionalmente violenta”, ya que alberga al 9% de la población mundial, pero es el escenario de un tercio de los homicidios que se producen en el planeta. Las tasas de homicidio son de más de 24 por cada 100,000 habitantes en esa zona, la única donde la violencia va en aumento desde 2005, según el trabajo, elaborado por la responsable de investigaciones sobre seguridad ciudadana del BID.

Sin lugar a dudas, el aumento estrepitoso de la violencia es una consecuencia directa de la crisis del sistema capitalista, que se refleja el creciente desempleo, alto costo de la vida y la reducción de ingresos de la familia por la imposición de impuestos y la devaluación constante de la moneda, situación que determina las migraciones masivas de cientos de personas en la región centroamericana en la búsqueda de mejores alternativas; o simplemente, en la vinculación en el crimen organizado de cientos de jóvenes que no encuentran alternativas de vida por la cobertura ineficiente del sistema educativo o el desempleo generalizado.

La aplicación de políticas neoliberales por parte de los agentes de la burguesía son las que han incidido en gran medida para el aumento de los crímenes violentos en Honduras. La proliferación del crimen organizado, maras y organizaciones delincuenciales se debe al aumento de la pobreza y a las grandes desigualdades propiciadas por el sistema capitalista. La reducción del aparato estatal, los bajos salarios de los agentes públicos inciden para que estos participen de actos ilícitos y corruptos. Mientras no se elimine la pobreza y las grandes desigualdades no se erradicará la violencia y la criminalidad que arrastra la injusticia social. ■



REALIDADES E HIPOCRESÍAS SOBRE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD SOBERANA

Por Sebastián Chavarría Domínguez

El tema de la seguridad es motivo de orgullo para el gobierno sandinista. Las encuestas y los analistas internacionales afirman categóricamente que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Este solo hecho ha permitido que las maquilas y empresas transnacionales escojan a Nicaragua como un lugar donde instalarse debido a la mano de obra barata y a las condiciones de seguridad, en una región caracterizada por la inseguridad y la violencia.

Las actuales condiciones de seguridad tienen su origen en el control férreo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el Ejército Nacional y en la Policía Nacional (PN), instituciones que surgieron de la revolución de 1979.

La Ley de Seguridad Democrática

A finales del 2010, el presidente Daniel Ortega impulsó la aprobación de la Ley No. 750, Ley de Seguridad Democrática, cuyo eje central fue la designación de la Dirección de Información para la Defensa (DID), organismo adscrito al EN, como secretaría ejecutiva del sistema de defensa nacional. En pocas palabras, desde la Ley No. 750, y desde mucho tiempo atrás, el EN es el eje de la defensa nacional en la lucha contra posibles enemigos externos, incluidos el narcotráfico y el crimen organizado.

Esta Ley No. 750 estaba a tono con el lenguaje del Tratado Marco de Seguridad Democrática firmado por los Estados centroamericanos en 1995.

Los objetivos de la Seguridad Nacional, conforme la Ley No. 750, eran la preservación de la democracia, la soberanía, la independencia y la integridad territorial, el mantenimiento del orden constitucional, la defensa del Estado ante los ataques armados extranjeros, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Cuando se aprobó la Ley No. 750

no hubo tanta oposición como ocurrió con la Ley de Seguridad Democrática recientemente aprobada.

Los cambios en la Ley de Seguridad Soberana (LSS)

El artículo 4, literal b, introduce nuevos conceptos o propósitos que no estaban en la Ley No. 750. Veamos. “Garantizar la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, sustentado en el constante fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad económica y la superación de la pobreza y la pobreza extrema”.

Y el literal f agrega lo siguiente: “Garantizar las condiciones de seguridad, paz y estabilidad que permitan el desarrollo integral de las personas, familia, comunidad, trabajadores, productores y empresarios en estrecho vínculo con el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional”.

El artículo 7 introdujo el concepto de riesgos, aclarando cuales son: 1. Catástrofes o desastres naturales. 2. Efectos del calentamiento global y del cambio climático. 3. Cualquier otro factor que genere peligro a la seguridad de las personas, de la vida, la familia y la comunidad, así como de los intereses supremos de la nación nicaragüense.

El artículo 8 amplió las definiciones de amenazas: Cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones; las pretensiones de cualquier Estado de expansión sobre los recursos y espacios territoriales y materiales con que cuenta el país; las actividades de la narcoactividad y de la delincuencia conexos. El ingreso y expansión de criminales de pandillas o maras; el terrorismo; actos tendientes a consumir genocidio, espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, en contra del Estado y la nación nicaragüense, de conformidad a lo establecido en la legislación penal de la República de Nicaragua; actos de injerencia extranjera

en los asuntos nacionales que puedan violentar los principios fundamentales establecidos en la Constitución; actos ilícitos en contra de la seguridad de la aviación y de la navegación marítima; ataques externos a la seguridad cibernética que alteren o afecten los sistemas de comunicación nacional; actos contra la infraestructura; cualquier otro acto o actividad que atenta contra el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad.

Endureciendo el aparato represivo

Como se puede apreciar, la nueva LSS amplió al máximo las definiciones, fusionando conceptos que en la legislación estaban divididos en asuntos de orden externo e interno. Tradicionalmente los asuntos de la defensa se consideran amenazas que provienen del exterior. Y las conmociones sociales se consideraban amenazas del interior. Con la nueva ley, las amenazas externas e internas están fusionadas y el EN se transforma en la institución rectora del sistema de la defensa soberana, llegando en los hechos a dirigir las acciones de la Policía Nacional.

El mensaje del presidente Ortega es muy claro: se avecinan momentos difíciles, producto de la crisis económica y el declive de la ayuda petrolera de Venezuela, por lo tanto ha ajustado la legislación de manera tal que pueda contar con instrumentos de represión en casos de que se presenten algunos de los casos contenidos en los artículos 4,7 y 8 de la nueva LSS.

El artículo 8 tiene un claro contenido relacionado con el conflicto con Colombia, originado por la sentencia que le otorgó 90,000 kilómetros cuadrados de mar a Nicaragua, y que Colombia se resiste a aplicar y reconocer. Esa misma definición se puede aplicar al conflicto limítrofe con Costa Rica relacionado al Río San Juan y al mar territorial en disputa.

La mención a las incursión de maras y pandillas es otro aspecto que no estaba contemplado en la Ley No. 750, y que ahora permite al EN y la PN actuar con



mayor legalidad en la persecución y aniquilación de aquéllas.

También se aplican las nuevas definiciones contra los grupos armados que existen en la montaña, conformado en su mayoría por ex contras descontentos.

El COSEP se rasgó las vestiduras

Debido a la alharaca de los partidos de la oposición burguesa, los que denunciaron un retorno al sistema policial de los años 80, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) manifestó dudas sobre el contenido de la nueva ley.

Freddy Blandón, representante de los empresarios del COSEP, compareció ante la Comisión de la Asamblea Nacional para expresar sus críticas al proyecto de ley.

“(La iniciativa de Ley) tiene que tener una coherencia y tiene que tener un equilibrio entre lo que son los objetivos de la defensa y la seguridad, principios que

están en la parte orgánica de nuestra Constitución, con relación a los principios de la defensa, con lo que son los deberes y los derechos individuales de los ciudadanos nicaragüenses. Nosotros creemos que si guardamos correctamente ese equilibrio, esta ley no debe tener mayor problema (...) Creemos que el concepto de conflicto no está definido, pero en particular nos interesa que cualquier definición que esté planteada aquí no deje el mínimo margen a la discrecionalidad. ¿Por qué? Porque si ya la definición comienza a insinuar discrecionalidad, la aplicación se distorsiona totalmente.” (La Prensa, 11/11/2015).

Los empresarios, como siempre, no están preocupados por una posible restricción a las libertades democráticas, sino por la seguridad de sus negocios. Por ello plantearon una reforma que incluyera que las autoridades no pueden violentar los derechos y garantías contenidos en la Constitución, a lo que el jefe de la bancada

sandinista, contestó en tono de burla, una verdad de Perogrullo.

En el fondo, los empresarios están totalmente de acuerdo con un fortalecimiento de los mecanismos de seguridad, porque al igual que el gobierno sandinista, sabe que vienen duros momentos.

Por ello, José Adán Aguerrí, muy orgullo de los aportes del COSEP, dijo que “Queda claro que es prohibido transgredir los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de Nicaragua y aquellos reconocidos en

que más claramente expresó las críticas al proyecto de ley: “da funciones a los militares para ‘anticiparse’ a posibles actos de ‘amenazas o riesgos’ contra ‘objetivos’ fundamentales del Estado, como narcotráfico, crimen organizado, traición a la patria, desestabilización, y otros conceptos, mezclando funciones de la seguridad pública con la defensa nacional y anteponen mano militar a asuntos del orden civil, como las protestas políticas y reclamos de oposición.” (La Prensa, 28/11/2015).

La defensa de las libertades democráticas

Existe una fuerte tendencia a la creación de regímenes bonapartistas, sobre todo en periodo de crisis. Desde su retorno al poder, en el año 2007, el sandinismo viene trabajando aceleradamente en la creación de un régimen bonapartista alrededor de la persona de Daniel Ortega, quien asienta su poder en el control del Ejército y la Policía Nacional.

Con la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Soberana esta tendencia se fortalece. El sandinismo se

prepara para los años duros que están por venir. A partir del surgimiento de conflictos laborales y sociales, como la huelga de la mina El Limón, las luchas campesinas y de ambientalistas contra la construcción del Gran Canal Interoceánico, el gobierno sandinista ha utilizado cada vez más abiertamente mecanismos de represión contra las luchas obreras y populares.

Este aspecto no le interesa a la burguesía del COSEP. Las ONGs hacen una defensa en abstracto de la democracia burguesa. Corresponderá a los trabajadores encabezar la lucha por la defensa de las libertades democráticas cuando se produzcan los ataques. Ya se han producido y la tendencia es que se agudicen, por ello los trabajadores y la izquierda debemos ser la vanguardia de la defensa de las libertades democráticas, especialmente cuando se produzcan luchas obreras y populares. ■



instrumentos internacionales de los que el país forma parte (...) En este caso Cosep hizo un aporte desde la visión del sector privado hacia la sociedad civil que vela por el clima de negocios y afortunadamente persisten, creo que dentro de un escenario de un mundo real se logró avanzar lo más posible, lo ideal no es eso, pero aquí volvemos otra vez a la diferencia entre el mundo real e ideal.” (La Prensa, 3/12/2015).

Las críticas del IIEP

La burguesía nunca ha defendido las libertades democráticas, sino que se ha aliado al gobierno de turno, para sacar mayor provecho económico. Así fue durante el somocismo, y así es ahora bajo este nuevo gobierno sandinista.

La defensa de la democracia burguesa la han hecho algunas ONGs, destacándose entre ellas el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), convirtiéndose en la organización



CRISIS ECONÓMICA Y ESPECTRO POLÍTICO

Por Ernesto Fuertes

La discusión principal hoy en día en Costa Rica gira en torno al tema del déficit fiscal, detrás del cual se agrupan toda una serie de políticas como el salario único, la reducción de gasto público (presupuestos, transferencias, etc), la aprobación del Plan Fiscal la ley de empleo público y salario único (el congelamiento de plazas y la igualación –reducción de salarios del sector público), y la seguidilla de proyectos privatizadores.

Contexto histórico y coyuntural

Todas estas políticas están relacionadas. El Plan Fiscal incluye impuestos indirectos –el IVA, por ejemplo–, el levantamiento de exenciones a productos básicos para la población o el aumento del impuesto de renta de la ‘clase media’ donde hay que tener cuidado con las definiciones, ya que se incluyen sectores asalariados, y no exactamente pequeño-burgueses, etc.

La ofensiva privatizadora abarca el recientemente logrado negocio de los muelles de Moín, en la provincia atlántica de Limón a la empresa holandesa APM Terminals, los subsecuentes proyectos de ‘contingencia eléctrica’ (la co-generación de energía hidroeléctrica por parte de la empresa privada y en contra de la empresa estatal ICE), la intención creciente de privatizar la refinería de petróleo estatal RECOPE, y las distintas instancias en las que la empresa encargada del servicio del agua estatal (AyA) defiende las fuentes de agua para proyectos privados o de alianzas público-privadas (alianzas, las cuales, son la médula central del programa de gobierno para el futuro candidato del PLN José María Figueres), etc.

La política cambiaria, crediticia y financiera en general (la promoción de la devaluación por parte desde Oscar Arias, el manejo de las tasas de interés, hasta el acceso al crédito para la pequeña-empresa) está caracterizada por el

sometimiento continuado al comercio exterior.

La pretensión del actual gobierno de Luis Guillermo Solís y del conjunto de la burguesía es que la crisis económica sea pagada por los trabajadores y la pequeña burguesía (campesina y urbana en general), al mismo tiempo que intenta destruir o aminorar conlleva en el plano político a un conjunto de ataques contra una serie de derechos democráticos que han caracterizado a la democracia burguesa



costarricense después de la guerra civil de 1948, y que están consignados en el Código de Trabajo o en las Garantías Sociales.

Cambios sustanciales en la economía

Desde 1978 los servicios y la industria superaron a la agricultura como porcentaje mayoritario del PIB, y en los años 80/90 la industria manufacturera también superó a la agricultura dentro de las exportaciones. En el campo, la concentración de la tierra alcanzó niveles nunca antes vistos en Costa Rica: aunque no podemos hacer una comparación exacta entre las fincas por números de hectáreas y por cantidad de parcelas (este último siendo el único que aporta el último censo agropecuario del 2014), y asumiendo que las fincas con 4 y más parcelas son al mismo tiempo las que tienen 500 y más hectáreas, vemos un crecimiento entre 1984 y el 2014 del 0,7% al 3,70%, triplicando las fincas grandes que existían no solo desde el censo del 84, sino incluso desde 1963. Asimismo, es

solo después del 48 (donde creemos que juega en gran parte la contrarrevolución y la destrucción del Partido Comunista) que se da una extensión de las tierras agrícolas desde alrededor del 30% en 1950 hasta el 50% en 1984, algo que no sucedía desde inicios del siglo XX (se mantenía en 30% desde alrededor de 1910).

Es la primera gran ruptura (con todo lo parcial que pueda ser) con el modelo parcelero. Eso explica que aunque entre los censos de 1970y 1984 se mantenga

un porcentaje relativamente idéntico al 1%, en realidad entre uno y otro censo estamos hablando de extensiones de tierra radicalmente distintas. La extensión de tierra agrícola luego de 1984 disminuye, paralelo al crecimiento exponencial de las fincas más extensas hasta la actualidad que ya mencionamos hasta el año 2014. Esto habla de una mayor concentración de la tierra en latifundios paralela a

la decaída del modelo específicamente agro-exportador (aunque no en términos absolutos, sino relativos), aunque parece seguir siendo incomparable al radio latifundio-minifundio de países como Guatemala o El Salvador.

La industria propiamente dicha tiene mayor participación de valor en las exportaciones de Costa Rica que la agricultura, y tiene el tercer lugar de participación en el PIB (detrás de los servicios y el comercio), pero en términos concretos, el trabajador industrial es superado en términos cuantitativos por los trabajadores de comercios, de talleres mecánicos, de manufacturas. El trabajador agrícola se mantiene como el segundo rubro con mayor cantidad de trabajadores después del comercio. Esto quiere decir que aunque el modelo exportador costarricense deja de ser predominantemente agrícola, el campesino sigue teniendo un peso enorme en términos de fuerza laboral.

En cuanto a la pequeña burguesía, las PYMES representan la mayoría de empresas, aunque las grandes empresas



son las que tienen mayor cantidad de empleados (alrededor del 80%) y la mayoría de las exportaciones. Asimismo, el sistema de crédito concentra el 80% del crédito en las empresas grandes, y solo alrededor del 20% en las PYMES, aunque sean más que aquellas.

Por último: el único sector que se mantiene en crecimiento a lo largo de la segunda mitad del siglo XX (desde 1948), además de los servicios, es el capital comercial y financiero. Esto reformula completamente la forma en que se ha planteado el dominio capitalista en las periferias centroamericanas: mientras la agricultura deja de ser el representante de mayor valor dentro de la economía costarricense, y siendo superado por los servicios o la industria, el capital comercial es el único cuyo poder se mantiene estructuralmente constante a lo largo de la historia reciente del país.

El mayor obstáculo para el desarrollo de la región no es el "oligarca terrateniente", sino el capital comercial y financiero. El capital comercial y financiero supedita al capital industrial. Esto tiene una gran importancia política: la burguesía manufacturera es más propensa a oponerse a la apertura de los mercados, lucha desesperadamente por la creación de un mercado interno. Las disyuntivas entre el capital industrial y el comercial/financiero representan entonces las disyuntivas entre las salidas republicanas y las salidas autoritarias/bonapartistas en Costa Rica, aunque hay que tener cuidado: las divergencias políticas no se circunscriben nítidamente a capitales específicos de la economía, sino a fracciones distintas de cada capital.

Si unimos todo lo anterior, vemos que la solución del déficit fiscal a través de impuestos progresivos (tanto directos a las utilidades empresariales como subidas arancelarias a la importación y exportación), las políticas cambiarias y financieras (bajas tasas de interés y reprecación del colón), el aumento de la demanda del consumidor (a través de salarios y empleo), además del aumento de la demanda agregada en general (lo cual implica la mejora de la demanda campesina a través de una reforma agraria progresiva), y el mejor acceso al crédito, son políticas transicionales que separadas no tienen ningún valor, pero que al

combinarlas pueden unificar los intereses de los campesinos, con los del proletariado y la pequeña-burguesía. En este sentido, todas estas consignas procuran partir del plano sindical y reivindicativo de los diferentes sectores hasta el plano general y político, para oponer todas esas capas del pueblo contra las políticas del actual gobierno burgués y del Estado capitalista. Por lo tanto, estas políticas tienen que constituir el programa de transición para Costa Rica, como parte de la lucha por la reunificación socialista de Centroamérica.

Todo esto se resume en que el movimiento obrero y popular luche por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que realice todos los puntos que mencionamos anteriormente.

Los partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa

El sector más extremo de la derecha conservadora, representada por el Movimiento Libertario (ML), busca que no se apruebe ni un solo impuesto más (aunque esto provoca más déficit), y que simplemente se afronte el problema desde la reducción del gasto (en concepto de salarios, presupuestos, programas sociales, la participación del Estado en la producción de servicios como la electricidad, el agua o el refinamiento de petróleo, etc).

El sector moderado de la derecha neoliberal propone una mezcla de recortes al gasto y un aumento de los impuestos que recaerían sobre el consumidor y el asalariado en general, sin discusión alguna de impuestos directos a los capitales empresariales. En ésta posición se encuentran desde el Partido Liberación Nacional (PLN) --recordemos que el programa de gobierno del candidato del PLN, Johnny Araya, incluía impuestos directos a los capitales, algo mucho más 'avanzado' que lo que propone hasta ahora el partido oficialista--, y el partido de gobierno Partido Acción Ciudadana (PAC). No es casual la unidad que han mostrado estos dos partidos en relación a la aprobación del presupuesto del año 2016.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el bloque cristiano o algunos otros partidos minoritarios representados en la Asamblea Legislativa tienen posiciones intermedias entre estos dos polos

extremos y moderados de la burguesía.

Frente a estas polarización, el partido Frente Amplio (FA) propone el cese de los ataques contra los salarios, se opone la reducción del presupuesto y el gasto del sector público, aunque cede en cuanto a la necesidad de revisar ciertos gastos, en la aprobación del impuesto al IVA y otros temas (autoriza la participación del ejército estadounidense en las costas de Limón como parte de la supuesta 'lucha contra el narcotráfico', por ejemplo), confluendo parcialmente (y de manera creciente) con el bloque de partidos de derecha nombrados anteriormente. En todo caso, defienden un alto a las privatizaciones en el país, que no se recorten los gastos públicos en salarios, presupuestos y programas sociales, así como medidas progresivas como una reforma tributaria progresiva (con impuestos directos a los capitales y castigo a la evasión fiscal) como medida para solucionar el tema fiscal y de la crisis en general. Se perfila ante las amplias masas como un partido de izquierda, pero con posiciones cada vez más conciliadoras y reformistas

La izquierda radical

Por fuera de la Asamblea Legislativa, más a la izquierda está la minoritaria ala radical y revolucionaria costarricense, la única que plantea un programa mínimo de reivindicaciones transicionales de salir del capitalismo. Todos estos grupos desarrollan propuestas relativamente divergentes entre sí, pero coinciden en defender las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares en general, así como la necesidad de que la clase trabajadora asuma el rol de liderazgo en la lucha contra el capitalismo neoliberal.

Aunque aumenta el descontento y explosividad social, la mayoría del pueblo confía todavía en la democracia burguesa. La izquierda revolucionaria no tiene influencia sobre el movimiento de masas, y se caracteriza además por su sectarismo y canibalismo político. Para construir una alternativa revolucionaria en Costa Rica es imprescindible la unidad de acción entre todos los grupos de izquierda, y debatir ampliamente los principales problemas que aquejan a los trabajadores. ■



NACIONALIZAR EL TRANSPORTE, NO HAY OTRA OPCIÓN

Por Marcial Rivera

El problema del transporte público en Guatemala es ampliamente conocido. El manejo de la cosa pública de forma corrupta e inescrupulosa no ha escapado al tema del transporte; se conocen de los contubernios que en su momento llevaron a la compra de buses rojos con fondos públicos, y que implicó corrupción en la compra de los mismos, durante el gobierno de Oscar Berger. Una situación similar se dio mientras Álvaro Colom presidía el ejecutivo; en este mandato se dio una compra anómala de unidades de transporte sobrevaloradas y que se convertirían en el 'transporte del futuro', esto involucró al alcalde capitalino Álvaro Arzú.

El tema del transporte público y la crisis actual, ha sido poco tratado por los medios de comunicación masiva, y también ha sido ignorado por la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y otras entidades, cuando se sabe que

el subsidio al transporte colectivo ha ido en aumento durante el transcurrir de los años, sin que exista rendición de cuentas hacia la población. No existen libros contables que estén a disposición de la población, y los montos de dicho subsidio son sencillamente escandalosos. Actualmente los empresarios de transporte público, demandan recibir más de novecientos millones de quetzales.

La idea del subsidio es que se mantenga una 'tarifa social', es decir, que el valor del pasaje sea de Q.1.00. No obstante si se toma en cuenta que el subsidio es financiado por los contribuyentes, el valor del pasaje es mayor a Q.1.00; no dejando de lado el hecho que en la mayoría de unidades de transporte, en horarios de mayor demanda, sobre todo al final de la

tarde y el fin de semana, el cobro del pasaje es incrementado de manera ilegal por las unidades de transporte, sin que ninguna autoridad haga algo a este respecto.

En el transporte público también hay corrupción

Los buses rojos se encuentran en malas condiciones y prestan un mal servicio, con unidades de transporte sobrecargadas, obsoletas y en mal estado; además de los buses extraurbanos, que aparte de ser bastante viejos, expiden cantidades de dióxido de carbono, que contaminan en

a la población que usa este medio de transporte.

El transporte público debe ser público, debe nacionalizarse, ser eficiente y eficaz, los pilotos deben pasar por un proceso de entrenamiento para dar un mejor servicio a la ciudadanía, que merece ser tratada con dignidad, debe ser equipado de cámaras de seguridad y la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de la población y la eficiencia del servicio. Además de esto los pilotos, ayudantes de pilotos, y otro personal logístico, no cuentan con prestaciones laborales, seguro médico, ni otro tipo de beneficios, que como trabajadores les corresponde.

Asimismo, la nacionalización del transporte público por un lado evitará la necesidad de un subsidio por parte del gobierno, tampoco tendrá que lidiar con las extorsiones a las unidades de transporte, y los asaltos a los pasajeros. Pero la nacionalización implica que el manejo del mismo esté controlado por la ciudadanía por medio de comités ciudadanos, presididos por la clase trabajadora, que

es la población directamente usuaria y beneficiaria, del transporte colectivo y que velen por el manejo de los fondos y la calidad del servicio otorgado a la población. Por otro lado, dignificará a todos los trabajadores en sus distintos niveles, que se ganan la vida por medio del transporte público.

Desde el Partido Socialista Centroamericano, exigimos al gobierno de Alejandro Maldonado, la inmediata nacionalización del transporte colectivo, y que el nuevo gobierno de Jimmy Morales, sienta las bases de un sistema digno, eficaz y eficiente, que beneficie directamente a la clase trabajadora, y que esta misma sea la que fiscalice sus operaciones. ■



demasiado el aire, y es un atentado contra la naturaleza, pues en algunas zonas y en algunos horarios, la calidad del aire se vuelve mala, por debajo de los niveles permitidos para el ser humano.

En el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA), ya se han dado más de treinta despidos, producto de la falta de subsidio, y todo apunta a que el número de despidos irá en aumento, sin dejar de mencionar que los trabajadores actuales han sido afectados por mayores cargas de trabajo y han pasado de tener prestaciones laborales, a facturar como pequeño contribuyente. El transmetro – en sus distintos ejes- ha dejado de tener el sistema de cobro electrónico, por lo poco transparente que este resulta en el manejo del mismo, afectando considerablemente